
EL CONADE: ORGANIZACIÓN Y RESULTADOS (1961-1971)

Aníbal Pablo Jáuregui¹

Palabras clave *Resumen*

CONADE, Este artículo realiza una sinopsis sobre la evolución de la planificación argentina
Planificación, por parte del principal órgano del sistema nacional de planificación, el Consejo
Ideas, Nacional de Desarrollo (CONADE), con el objetivo de relacionarla con la evolución
Instituciones institucional, pero también con las políticas económicas adoptadas en cada etapa.
Aquí se analiza la configuración de capacidades estatales específicas, se señalan
sus aportes a la institucionalidad económica y se marcan sus deficiencias relativas
al modelo de estado desarrollista. El artículo está centrado en el surgimiento
del CONADE, su constitución interna, su ampliación y perfeccionamiento
en el período radical y su funcionamiento bajo el régimen autoritario de la
Revolución Argentina. Finalmente, haremos un balance de sus logros y fracasos.

Recibido

1-9-2014

Aceptado

2-3-2015

Key words *Abstract*

CONADE, This article provides an overview on the evolution of Argentine planning and
Planning, the main body of the national planning system, the National Development
Ideas, Council (CONADE). It seeks to link them to institutional developments,
Institutions but also to the economic policies adopted at every stage. The configuration
of specific state capacities is analyzed, as well as their contributions to
economic institutions, and their deficiencies relating to developmental
state model. In short, the article focuses on the emergence of CONADE,
its internal constitution, expansion and improvement in the radical
period and its operation under the authoritarian regime of Argentine
Revolution. Finally we take stock of their achievements and failures.

Received

1-9-2014

Accepted

2-3-2015

En el mundo, la planificación económica estuvo asociada a la difusión de las ideas keynesianas tras la Gran Depresión. Sin embargo, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando adquirió un fuerte impulso por acción de la Organización de Naciones Unidas, que la adoptó como medio de reorganización económica mundial, de acuerdo con la economía del desarrollo y con cierta inspiración en la planificación centralizada soviética.

En América Latina, el *planning* comenzó a ser aconsejado desde distintos centros internacionales y regionales ligados a la ONU. Pero este influjo institucional estuvo vinculado con demandas que respondían a la dinámica y a la estática del crecimiento

1 Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo (CEED) / Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires - Universidad Nacional de Luján. Dirección: Córdoba 2122, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. jaureg@sinectis.com.ar.

económico de Latinoamérica durante la posguerra; entre ellas, la necesidad de innovar el diseño de las políticas públicas tanto en función de la rigidez propia de la estructura interna como de modificaciones convenientes a su inserción internacional. La urbanización y la industrialización provocaban nuevos desafíos a los gobiernos, que no podían ser resueltos en el corto plazo y que requerían programación de largo aliento. Por otra parte, el Estado, que poseía la clave para acceder a recursos externos y a la movilización de los internos, pasó a encabezar un modelo denominado Industrialización Dirigida por el Estado (IDE) que dominó el subcontinente. Este modelo es entendido, de acuerdo a Rosemary Thorp (1998, pp. 135-159), seguida recientemente por autores como Bértola y Ocampo (2010), como un proceso caracterizado por la predominancia del crecimiento de la industria como factor esencial del desarrollo, por la extensión de la acción estatal a diversos campos del quehacer económico y social y por el “desarrollo hacia adentro” con la consiguiente discriminación del sector exportador.

La planificación atendía a la generación de un marco de certidumbre que buscaba contrarrestar el movimiento cíclico, con el recuerdo de la depresión y la guerra. En la práctica, la planificación establecía programas gubernamentales plurianuales, que en forma compulsiva orientaban la actividad pública y en forma inductiva o indicativa, la privada. La formalización, entendida como sistema de símbolos basado en ciertos axiomas, eliminaba la subjetividad y la imprevisibilidad en las decisiones. Su funcionalidad al sistema capitalista vendría también de la mano de un empresariado innovador, que potenciaba las posibilidades de hacer negocios incorporando tecnología y organización. ¿Qué se entendía específicamente por planificación y plan económico? Aunque en la década de 1950 era rechazado abiertamente por los ortodoxos, con los años fue siendo más inespecífico. Así, el diccionario publicado en 1967 por dos economistas de la London School of Economics, Arthur Seldon y P.G. Pennance, contemplaba para *planificación* la idea de organización centralizada de los factores productivos (o planificación compulsiva) y para *planificación económica* distinguía la dirección de la economía por parte del gobierno” (Seldon y Pennance 1967, pp. 415-418). No era esta última la acepción más generalizada. Más bien, el “plan económico” suponía una acción del Estado sobre las fuerzas del mercado o el conjunto de respuestas entrelazadas de un gobierno en los asuntos decisivos de su agenda. Pero también podía hacer referencia a las acciones anticíclicas, que tenían por objeto combatir la recesión o la estabilización de la economía frente a una corrida inflacionaria. Sin embargo, normalmente –como hacemos aquí– aludía a los planes de desarrollo que contenían un modelo analítico, esto es, un diagnóstico y un modelo normativo, es decir, una proposición.

En la Argentina, la planificación fue implementada por el peronismo para edificar una versión del Estado de Bienestar. Pero la planificación sería un fenómeno relativamente tardío en el país; llegaría con la Alianza para el Progreso y la firma de la Carta de Punta del Este, que creaba las condiciones para la ayuda externa y establecía la recomendación de sistemas de planificación nacionales para recibir dicha ayuda. La Conferencia Económica para América Latina (CEPAL) se convirtió en proveedora del

know how para la organización nacional de los sistemas de planificación. El Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) crearía con este fin una dependencia interna *ad hoc* en 1962, que se encargaría de estudiar específicamente el tema de entrenar funcionarios de los países involucrados, de asesorar a los gobiernos en la planificación y de colaborar en la modificación de los planes de estudios para formar en las universidades especialistas en desarrollo.

Si bien la adopción del sistema de planificación en la Argentina estuvo directamente conectada con influjos mundiales², su trayectoria no es escindible de las vicisitudes de su régimen político y de sus repercusiones institucionales, como tampoco de la conflictividad política y social ligada a todas ellas. Aquí analizaremos los componentes que integraron el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). En primer lugar, veremos su proceso de constitución, ligado a la creciente influencia de la CEPAL en la Argentina. En segundo lugar, analizaremos la tentativa de configurar un sistema de planificación democrática unida al intento de afirmación del sistema constitucional; posteriormente, estudiaremos cómo operó la planificación en el régimen autoritario de la Revolución Argentina. Finalmente, como conclusión, haremos un balance de la evolución de la planificación en ese lapso, sus aportes a la administración económica y política y las razones de su crisis. A través de estas páginas, pretendemos mostrar los aportes de la planificación a la institucionalidad económica argentina y su utilización como herramienta movilizadora de recursos estatales y sociales.

LA PLANIFICACIÓN EN UN CONTEXTO DE PRECARIEDAD INSTITUCIONAL (1955-1963)

Bajo el peronismo clásico, la planificación buscó orientar el sistema productivo hacia las políticas de pleno empleo y de redistribución del ingreso que implementaba el gobierno. Sin embargo, el derrocamiento de Perón provocaría un alto en su aplicación. El ciclo que sucede a la caída del régimen peronista ha sido definido como una lucha entre un conjunto de fuerzas sociales y políticas en la que ninguna tenía la capacidad de imponerse definitivamente a las demás. El concepto de “empate hegemónico”, utilizado por Portantiero (1977, p. 531), ha servido para describir esta situación, en la que había un margen muy limitado para el crecimiento de la economía. Los cambios en la estructura económica con el fortalecimiento de ramas más concentradas y modernas de la industria debió realizarse entonces en un contexto político negativo que conspiró claramente contra las posibilidades de equilibrar el crecimiento y de mantener una adecuada distribución del ingreso.

Esto pudo advertirse ya con el denominado Plan Prebisch de 1956. Sin hacer un análisis exhaustivo, podemos definirlo como un programa de coyuntura que partía de un

2 Hemos analizado este aspecto en Aníbal Jáuregui, (en prensa). La planificación en la Argentina: el CONADE y el PND (1960-1966). *Anuario del Centro de Estudios Históricos “Carlos Segreti”*, Universidad Nacional de Córdoba.

diagnóstico exageradamente pesimista de los problemas que había dejado el peronismo y una propuesta que aunaba el restablecimiento de los equilibrios internos con los externos (Gerchunoff y Llach 1998, pp. 235-239). Anticipaba también un plan de largo plazo, pero la condición provisoria del régimen de la "Revolución Libertadora" (1955-1958) impedía ponerlo en marcha. En 1958 la CEPAL supo elaborar un diagnóstico bastante preciso de la economía argentina que en parte contradecía la lectura que había hecho el Plan Prebisch.

En contraposición a la dictadura militar, la administración de Arturo Frondizi (1958-1962) desechó en un comienzo las medidas de corte coyuntural para abocarse casi exclusivamente a la resolución de los problemas estructurales (junto a la atención de su base electoral inicial), que se apoyaba formalmente en una planificación económica extendida. El desarrollismo representó acabadamente el diagnóstico común en Latinoamérica en relación a las dificultades de la exportación primaria y a las posibilidades del crecimiento industrial basado en el mercado interno (Frondizi 1958, pp. 11-14). Desde esa perspectiva, el desequilibrio del sector externo y la inestabilidad de precios sólo se resolvían transformando la estructura económica, que llevaba a los desequilibrios externos. A pesar de su firme convicción en el diagnóstico, la política económica atravesó etapas distintas y contradictorias. La primera fue propiamente desarrollista, aunque se vio desbordada por una explosión inflacionaria. En la segunda, adoptó como su propósito primordial la estabilización económica y financiera, que provocó una reducción del consumo interno y del nivel de actividad. Durante la tercera, quiso recuperar las premisas originarias, pero resultó desbordada por la inestabilidad política y económica, inmediata al golpe de marzo de 1962.

Fue justamente en esta última etapa, en octubre de 1961, cuando se creó el CONADE como un organismo encargado de la planificación, que –como parte de ella– se haría cargo del perfeccionamiento de la estadística pública y de los estudios de la economía nacional. Su fundación respondía a las recomendaciones de la Conferencia de Punta del Este de ese mismo año, que al crear el sistema de ayuda económica continental, inducía a la generación de instituciones planificadoras. Con todo, en su mismo origen, fue concebido para llenar un vacío importante dentro de la administración pública, lo que implicaba cubrir una diversidad de funciones: Frondizi esperaba que se transformara en un consejo económico y social con representantes de los trabajadores y los empresarios que evaluara las dificultades que el crecimiento trajera aparejado (Luna 1998, p. 147). Su conexión con la relación bilateral argentino-estadounidense quedaba reflejada en su funcionamiento junto a la Comisión Nacional de Administración del Fondo de Apoyo al Desarrollo Económico (CAFAD), surgida de los acuerdos con el Departamento de Estado firmados en 1959, que habían comenzado a finales del peronismo.

A pesar de todo, no hubo en esos años un planeamiento de las inversiones –algo que se advierte claramente en el sector automotriz–, pero sí concentración de las medidas de promoción en áreas estratégicas, como el petróleo y la siderurgia. No se llegó a conformar un plan de desarrollo general de largo plazo, pero tampoco hubo una pro-

gramación de los beneficios impositivos ni un análisis del impacto del endeudamiento externo privado de corto plazo³. Los vencimientos de deuda de muy corto plazo estallaron finalmente en el primer semestre de 1962 y provocaron una intensa, aunque breve, crisis que llegó hasta finales del año próximo. La línea del desarrollismo siguió otra agenda a la sugerida por la CEPAL y por Raúl Prebisch, especialmente en lo referente al rol del capital extranjero, de la ayuda externa y del ahorro interno. En estas diferencias conceptuales había también motivaciones políticas, considerando la participación del economista tucumano en las recomendaciones a los gobiernos militares de Lonardi y Aramburu, pero también pesaba sobre el ánimo del grupo desarrollista un rechazo al rol de la CEPAL como asesor de los gobiernos latinoamericanos.

El “acefalato” de José M. Guido (1962-1963), sostenido ilegalmente en unas Fuerzas Armadas que estaban divididas en torno a la salida institucional, profundizó la crisis económica y social. En este contexto negativo, pero tal vez gracias a él, la planificación económica adquirió mayor centralidad política. A pesar de su transitoriedad y de la impronta más bien ortodoxa con que condujo su política económica, el gobierno buscó avanzar en el terreno del planeamiento económico, ampliando la dotación del CONADE y sus áreas de incumbencia, creando varios programas de investigación. Uno de ellos fue el programa CONADE-CEPAL, que empezó a estudiar la forma de utilizar los datos de la realidad para proyectar un plan de desarrollo. Este era dirigido por Alberto Fracchia e integrado también por Oscar Altimir y por Juan V. Sourrouille⁴. En la cuantificación del desarrollo y en la aplicación de la matriz insumo-producto creada por Leontieff, participaba desde Santiago de Chile Manuel Balboa, quien fuera el introductor de la proyección cuantitativa en la programación del desarrollo. Tenía la experiencia de haber participado en la gestación del Segundo Plan Quinquenal, había trabajado en el Banco Central y estaba ligado a Gómez Morales. A la caída de Perón, fue convocado a trabajar en la sede central del organismo, desde donde su influencia se hizo sentir a través de los economistas argentinos que trabajaban en el CONADE (Balboa 1958). El otro programa interno fue el OEA/BID/CEPAL de Tributación encabezado por Federico Herschel, destinado a la elaboración de un diagnóstico preciso sobre el sector público. Inspirado en la heterodoxia de entonces, que cuestionaba el equilibrio presupuestario como un objetivo en sí mismo, se orientaba al desarrollo de propuestas más centradas en el nivel de actividad (calidad del gasto y fuentes de recaudación) (Herschel 1965a, 1965b).

Esta reorganización estuvo directamente vinculada con una recuperación de la influencia de Prebisch en la Argentina, cuyo prestigio continental era creciente. Una muestra del final de su “ostracismo” pudo percibirse en la Conferencia de la CEPAL

3 Originariamente, Frondizi hubiera querido establecer un orden de prioridades que comenzara por la “producción de los medios de producción” a través de la planificación, como sostiene Juan Pablo Franco 1969, pp. 341-405. Indudablemente, las condiciones políticas modificaron esa intención.

4 Entrevista a J. V. Sourrouille, 9 de octubre 2009.

de Mar del Plata de mayo de 1963⁵. En oposición al difícil trance nacional, el clima del evento destilaba optimismo sobre las posibilidades de superar la crisis y encarar una etapa de crecimiento sostenido, aprovechando la oleada de inversiones recibidas en el quinquenio anterior.

Como resultado de las deliberaciones, la CEPAL publicó un documento en el que hacía un balance de la situación económica regional, pero que tenía una obvia recomendación implícita para el Estado argentino. En esencia se mostraba que las funciones gubernamentales habían avanzado en forma inorgánica desde la década de 1930, en tanto que el crecimiento de la industria no se había producido en forma racional. El uso ineficiente de los recursos determinó un menor ritmo de crecimiento. Para resolver estos déficits, la Comisión sostenía la necesidad de que los países latinoamericanos contaran con un sistema nacional de planificación que involucrara en forma más eficiente la burocracia con el desarrollo. Para ello se quería implementar un complejo mecanismo a través del cual fluyera la información desde la administración pública en general para abastecer rutinariamente de información a los órganos planificadores. Los organismos de planificación sólo debían proveerse directamente o indirectamente de aquel tipo de información que, por su naturaleza, no podría ser provista en forma rutinaria. El sistema de planificación generaría un conjunto de orientaciones programáticas y, a su vez, los mecanismos de contralor. Un aspecto adicional, pero no menor, consistía en la consolidación de cambio cultural y ético, traducible en una escala de valores morales que debían ser aprehendidos por la sociedad para que coincidieran con los lineamientos del plan. Esto concordaba, por otra parte, con la idea de una participación de la sociedad en la generación de los planes (CEPAL 1963), un modelo de “planificación democrática” que remitía al que había formulado Karl Mannheim (1942, p. 179) –para oponerla a la planificación nacional-socialista– y que encajaba muy bien con la ideología política del gobierno radical como otro modo de participación ciudadana, distinto del previsto en el sistema político y parlamentario.

LA «PLANIFICACIÓN DEMOCRÁTICA» EN UN GOBIERNO CONSTITUCIONAL

La conformación de la nueva administración de la Unión Cívica Radical del Pueblo encabezada por Arturo Illia (1963-1966), con las limitaciones originadas en la proscripción del peronismo y sus aliados, parecía poner fin a la aguda crisis política iniciada en verdad en 1955, profundizada a la caída de Frondizi en 1962. Estaban dadas las condiciones para poner en marcha las ideas del desarrollismo cepalino que se diferenciaba del que habían implementado Frondizi y Frigerio en 1958-1962. Cuando Illia tomó posesión de la presidencia de la República, todavía persistían los efectos de la aguda crisis

5 De acuerdo a Sikkink (1988), la influencia de Prebisch sobre la política económica de este período no es muy relevante. El período elegido por Sikkink muestra que el ostracismo de Prebisch concluye con la caída de Frondizi y exhibe su incidencia en los años siguientes.

iniciada el año anterior. La inflación anual rondaba el 20%, la deuda externa sumaba U\$S 3.872,5 millones, que vencían mayoritariamente en los años siguientes. Si la actividad productiva había dejado de decrecer, el desempleo todavía alcanzaba el 9%.

Las metas del gobierno en materia económica consistían en la recuperación del nivel de actividad, evitando los desequilibrios externos. Por otra parte, adoptó una política gradualista en materia cambiaria, fiscal y salarial con el fin de reducir paulatinamente la inflación sin caer en un ajuste ortodoxo. Se adoptó una actitud de mayor distancia en relación al capital extranjero y los organismos multilaterales de crédito. Por último, aunque claramente se privilegiaba el corto plazo, se propició la consolidación del CONADE con el objetivo de responder a las demandas de cambios estructurales, en importante coincidencia con las recomendaciones de la CEPAL.

Además del trabajo en el corto plazo, desde un comienzo el gobierno del presidente Arturo Illia buscó responder las demandas de políticas de largo aliento y para ello le otorgó un lugar relevante en la administración nacional al CONADE, que tuvo una mayor autarquía administrativa, pero también una presencia más abarcadora en la gestión pública. El gobierno radical dio al organismo una presencia única en su gestión que venía a compensar sus deficiencias en términos de origen electoral y debilidad política. Para ello, concedió estabilidad en los cargos, manteniendo gran parte del plantel del Consejo y agregó nuevas áreas que, además de la planificación y el diagnóstico, tenían mayor compromiso con las políticas de corto plazo. Así, se mantuvo a Manuel San Miguel, que había sido su principal funcionario en la etapa anterior, dentro del grupo directivo, pero quien quedó a cargo fue el designado Secretario Ejecutivo, ingeniero Roque Carranza, secundado por el economista Bernardo Grinspun. A la Secretaría Técnica se le adosaron cuatro Grupos de Trabajos que tenían objetivos específicos: 1) Programación del Desarrollo Nacional; 2) Estadística, Metodología y Cálculo; 3) Inversión Pública y 4) Proyectos Especiales.

Se dio continuidad a los dos programas de investigación citados, el de Cuentas Nacionales de Fracchia y el de Tributación de Herschel. Para reforzar el perfil técnico y, además, la posibilidad de recoger experiencias internacionales se hizo un convenio en agosto de 1963 con la Universidad de Harvard. Su objetivo consistía en la provisión de asesoramiento y recursos humanos capacitados al CONADE, que serían utilizados en el planeamiento de corto y largo plazo⁶. Este convenio creaba el Servicio de Asesoramien-

6 El contrato suscrito con la universidad de Harvard fue firmado por el gobierno de Guido, siendo ministro de Economía José A. de Martínez de Hoz (h.), el 13 de agosto de 1963, aprobado por decreto 9120 del 10 de octubre de 1963. El objetivo del convenio es fortalecer la capacidad técnica del CONADE. Para ejecutar esto se contaba con fondos facilitados por préstamos del BID, según contrato celebrado el 29 de junio de 1962. Se justifica la ausencia de una licitación en el hecho de que este tipo de entidades no entran en competencias. La obligación de la Universidad era colocar un equipo de asesores expertos por un total de 85 hombres, como así también los servicios de un número adecuado de consultores a corto plazo. Los asesores y consultores debían ser seleccionados de común acuerdo entre la Universidad y gobierno. Uno de los expertos actuaría como jefe del grupo de expertos. La Universidad presentaría informes trimestrales para el desembolso de los fondos provistos por el gobierno argentino. Si bien este

to sobre Desarrollo, como departamento interno del CONADE, y estaba encabezado por Richard Mallon⁷, e integrado por los economistas Geoffrey Maynard⁸ y Willy van Rijckeghem⁹.

Sobre la base de esos dos programas, el aporte de los especialistas extranjeros y la jerarquización promovida desde la autoridad política, se dio formato a una organización integrada por unas 500 personas, la mitad de las cuales estaba compuesta por técnicos profesionales. La unidad y la efectividad del plantel del CONADE se nutría, además de la alta calificación profesional, la posesión de capacidades mayores que el promedio de la burocracia tradicional y el conocimiento de nuevas técnicas de administración pública, de una fuerte motivación a partir de la convicción de la trascendencia profunda que el trabajo encarado tenía en relación al futuro del país. La idea de “estar haciendo patria”, poco común en una burocracia de este tipo, era un sentimiento compartido. Indudablemente, su moral no se anclaba en el nacionalismo tradicional, entre otras cosas porque la participación de destacados especialistas extranjeros era uno de los aspectos centrales de su configuración. Además de Richard Mallon, arribado por el convenio con la Universidad de Harvard, se encontraba Simón Kuznetz, con la particular misión de estudiar las cuentas nacionales, distribución del ingreso y su participación en los programas de desarrollo. Se desempeñaron como asesores técnicos Albert Hart, especialista en cuestiones fiscales, Etienne Hirsch¹⁰, ex comisario del plan de Francia y el británico Geoffrey Maynard. A pesar de que muchos críticos del gobierno consideraban que éste no le prestaba mucha atención al fenómeno inflacionario, el hecho de que buena parte de estos expertos internacionales tuvieran investigaciones centradas en el alza de precios y en los programas de estabilización parece desmentirlo.

Destacados economistas, sociólogos y otros especialistas argentinos, egresados de las universidades argentinas, pero también ligados a centros como el Instituto Di Tella o el Instituto de Sociología dirigido por Gino Germani, se integraron a los cuadros del

convenio pudo haber contado con el consentimiento de la futura administración, electa en julio de 1963, de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), los acuerdos firmados con el BID en junio de 1962 ya iban en esa dirección.

7 Mallon había trabajado en varios países. Sus experiencias en la Argentina fueron reflejadas en el trabajo clásico Mallon y Sourrouille 1973.

8 Maynard, un respetado economista, experto en cuestiones monetarias de la Tesorería británica, estaba enfocado en cuestiones latinoamericanas. Fue un estudioso de la relación que tenían los precios de los alimentos con la inflación; ver Maynard 1962. Es autor, además, de un capítulo sobre la política económica del período 1966-1973; ver Maynard 1989.

9 Willy van Rijckeghem era un economista belga, especialista en América Latina. Entre 1964 y 1966, trabajó en la Argentina.

10 Ingeniero civil francés con una ya destacada carrera en órganos de administración en su país y en la comunidad europea. Representante francés en el Comité Económico temporal para Europa, 1945; Jefe de la División Técnica, Comisariado General del Plan 1946-49; Comisionado Adjunto, 1949-1952; Comisionado General, 1952-1959; participante en la creación de la Comisión del Carbón y del Acero de la Comunidad Europea, 1950-1952; y miembro de la OTAN, entre 1951 y 1952.

organismo; además de Fracchia y Herschel, Carlos Dieulefait (un importante estadístico santafesino), Oscar Altimir, Juan Sourrouille, Héctor Valle y Enrique Folcini¹¹.

El equipo liderado por Fracchia revisó las cuentas nacionales, que hasta ese momento habían sido llevadas por el Banco Central, a las que agregó las cifras de la distribución del ingreso. La revisión del producto demostró que había hasta ese momento una valuación incorrecta de la producción industrial, menor a la real, lo que implicaba rectificar el diagnóstico de estancamiento que se había hecho. Además, se avanzó notablemente en la determinación de la distribución del ingreso por categoría de ingreso personal, familiar y por ocupación (Goldberg 2004, p. 32).

Para agregar un componente que permitiera un acercamiento a la realidad a partir de las expectativas de los actores, se recurrió a las encuestas a los empresarios con el fin de obtener información respecto a expectativas de evolución de empresas, utilizando un padrón de los asociados a las organizaciones empresarias. Así, la predicción económica, sujeta a la estimación y verificación posterior, estaba al servicio de la ejecución de la política económica nacional (Herschel 1978). La predicción no tenía por objetivo sólo la estimación sino también la verificación posterior. El conjunto de herramientas de estimación, entre las que sobresalía el perfeccionamiento de la estadística, permitía que la planificación fuera algo más que un conjunto de "buenas intenciones", como se le podría adjudicar con seguridad al Primer Plan Quinquenal de 1947 (Daniel 2013, p. 6) y, en menor medida, al Segundo Plan de 1952.

La ampliación de funciones hizo que en 1964 se incorporara a su área de interés la Defensa Nacional, incluyendo representantes del Ministerio de Defensa. Con posterioridad, se firmó un contrato con la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares para la programación del desarrollo del complejo industrial de San Nicolás. Ambas medidas dan cuenta de la dimensión de la expansión del Consejo dentro de las instituciones del Estado, pero también de la importancia creciente de las Fuerzas Armadas y de la necesidad gubernamental de introducir mecanismos de neutralización de las amenazas desestabilizadoras.

En forma similar a lo que sucedía en muchos otros países, sus renovadas funciones de programación y control despertaron recelos en otras reparticiones públicas. Las prevenciones se incrementaban por las diferencias en las remuneraciones, justificadas en muchos casos por su mayor formación, pero también en la decisión de evitar la migración de los técnicos al sector privado, algo que sucedía regularmente con los organismos especializados.

Un argumento usual en la prensa opositora consistía en atribuirle al Consejo el manejo efectivo de la política económica, invadiendo la esfera ministerial¹². Detrás de un

11 Respecto a la participación de los economistas argentinos en el CONADE, véase Neiburg y Plotkin 2004, pp. 231 y ss.

12 Por ejemplo, el órgano del desarrollismo frondizista *Qué pasó en Siete Días* sostenía que la conducción económica se deslizaba del ministro Blanco hacia el CONADE. En el Consejo, Grinspun actuaba

organismo técnico, lo que se escondía era una tecnocracia que funcionaba como un ministerio paralelo que respondía a otras líneas de la interna partidaria. Se trasuntaba la falsa sensación de que el Consejo estaba detrás de muchas iniciativas gubernamentales. Estas críticas, que nacían en un clima político cada vez más confuso, reflejaban, de modo indirecto, la tensión que atravesaba al CONADE entre sus distintas funciones de planificación, de contralor y de ejecución.

Aunque existían varios sistemas de planificación diferentes, el espejo en el que se miraba el CONADE era el francés. Tomando esa referencia, Etienne Hirsch preparó un informe en el que se proponía agregar Comités Planificadores verticales y horizontales a la estructura organizativa existente. Los horizontales se ocuparían de mano de obra, financiamiento, tributación, comercio exterior. Los verticales se harían cargo de estudiar y monitorear el sector agropecuario, el energético, el siderúrgico, el químico, y las industrias de elaboración, transporte, vivienda, educación. Estos Comités estarían subordinados a la Organización Nacional de Planeamiento con dependencia directa de la Presidencia de la República. Los Comités Planificadores debían contar con la colaboración directa de las organizaciones de empleadores y trabajadores. Una dimensión que debía agregarse era la que correspondía a las provincias y a las regiones. Finalmente, se sumaba un Consejo Económico y Social que fuera elegido por las asociaciones representativas de sectores económicos para asesorar al Poder Ejecutivo y al Parlamento¹³.

Por entonces se hacía sentir, como influencia de peso, el también francés François Perroux, quien estuvo en la Argentina en 1964, dando un ciclo de conferencias. Él insistía en la necesidad de superar la teoría walrasiana del equilibrio general espontáneo que, además de ser errónea, no consideraba los beneficios colectivos. Si la ley del óptimo económico no se cumplía en los países desarrollados, cuanto menos lo haría en los subdesarrollados. En estos países cuya economía está inarticulada, la planificación era una lógica consecuencia de la importancia de la inversión pública directa y de la participación indirecta del Estado a través del crédito de las organizaciones públicas. Pero también esta situación realzaba la importancia de la planificación indicativa. Con ella la función del Estado buscaba la integración armónica de las partes a través de la adaptación a la realidad del país de las técnicas generales de planificación, la coordinación de los proyectos específicos con el plan nacional, la coordinación de los planes de las grandes empresas con éste y la coordinación de los planes nacionales entre sí.

Perroux introdujo una distinción de importancia, para los planificadores, entre las industrias enteramente nuevas, las modernas y las vegetativas, cuyas interacciones positivas activan el crecimiento. (Una forma de favorecer dichas interacciones eran los polos de desarrollo). A esta distinción le agregaba otra referida a las técnicas de planifica-

como operador ejecutivo, mientras Carranza asumía un perfil más teórico. (1965. Ejecutivo y Teórico. *Que Pasó en Siete Días*, año I n° 249, Buenos Aires, p. 5).

13 Informe del Ingeniero Etienne Hirsch sobre la organización de la planificación en la Argentina. Buenos Aires, CONADE, abril de 1964.

ción. En vez de hacerla entre planificación desde arriba y desde abajo, él proponía otra diferenciación de plan desde el centro y plan desde la periferia. Si el centro no realiza ningún arbitraje entre ambos, no podía hablarse de plan. En el caso de Francia e Italia, el plan iba de los agregados nacionales a los sectoriales y proyectos específicos, mientras que en el caso de Noruega era a la inversa. En el plan francés, se trataba de respetar los equilibrios o de cambiarlos. Cuando se realiza la proyección numérica concreta a nivel sectorial, se debía establecer un posible y un deseable relativos para cada sector que no se deducía del posible o deseable a escala de los agregados nacionales. El plan finalmente obligaba a repensar el papel de las instituciones económicas por las resistencias que generaba, ya que hacía tomar conciencia a los grupos –agricultores, trabajadores, cuadros, funcionarios– de su lugar en el conjunto. Así entendida, la democratización del plan tendía a sustituir el conflicto por la cooperación (Perroux 1967, p. 225).

El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno radical del pueblo, que estuvo en proceso de elaboración por el CONADE desde la misma asunción de 1963 y que finalmente fuera lanzado en octubre de 1965, tomaría varios de estos conceptos pero sobre todo los trabajos previos que se habían encarado en los años precedentes. Existe un consenso entre los investigadores en considerar el plan como un importante adelanto en materia de diagnóstico oficial de la matriz económica nacional, pero también como propuesta realista de desarrollo.

Su modelo analítico consideraba que la insuficiencia de planificación del proceso sustitutivo (en referencia tanto al retraso de la industria pesada heredada en gran medida del peronismo como a la experiencia frondizista en la metalmecánica) había provocado el cuadro de dificultades crecientes del sector externo. La escasez de producción agraria, la lentitud del proceso sustitutivo y el deterioro progresivo de la infraestructura, constituían el núcleo central de la inelasticidad de la oferta, la que presionaba hacia arriba el nivel de precios¹⁴. Fuera de este diagnóstico genérico, no estaba indicada una estrategia definida para resolver el desafío de la inflación¹⁵. Dentro de la clásica posición industrialista del momento, sus proyecciones tendían a la sustitución “compleja” de importaciones, a través de la creciente integración nacional de las cadenas productivas y el aprovechamiento del sector de producción de bienes de capital ya instalado en el país, con el fin de disminuir la vulnerabilidad externa¹⁶.

El plan fue presentado en el Congreso Nacional para su aprobación, pero las condiciones institucionales no contribuyeron a que fuera aprobado. Desde la mirada de

14 En buena medida se estaban incorporando a la labor del CONADE, no sólo al plan de desarrollo, las conclusiones del consultor internacional W. van Rijkkeghem, quien sostenía que un verdadero plan de estabilización requería la combinación de diferentes instrumentos: política salarial, política de crédito, además de toda la política monetaria. No sólo se trataba de estabilizar precios, sino también de sostener el crecimiento del producto y el salario real. W. van Rijkkeghem 1965, pp. IV-1.

15 Entre las metas del plan se incluía la “Eliminación progresiva de las tendencias inflacionarias”. (CONADE, *Plan Nacional de Desarrollo*, Buenos Aires, p. 114).

16 Anibal Jáuregui, *La planificación en la Argentina: el CONADE y el PND (1960-1966)*.

determinados sectores del *establishment*, el PND venía a confirmar la inoperancia del gobierno; no tanto por el plan en sí, que en buena medida se reconocía como una necesidad; se ponían en tela de juicio criterios gradualistas y heterodoxos que merecían el cuestionamiento de los sectores más ortodoxos en consonancia con demandas que se hacían desde los organismos multilaterales de crédito.

LA PLANIFICACIÓN AUTORITARIA: EL CONADE EN EL RÉGIMEN DE LA REVOLUCIÓN ARGENTINA

El golpe de Estado, anunciado y propiciado desde distintos medios, finalmente llegó en junio de 1966. El General Onganía y los principales mandos militares traían la idea de profundizar el modelo de planificación. En el Acta fundacional del régimen ya se preveía la formulación de un plan quinquenal. Así jerarquizado, era entendible que el CONADE pasara a integrar el Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo, junto al Consejo Nacional de Seguridad (CONASE), una dependencia directa del jefe de gobierno (hasta ese momento lo era del Ministro de Economía). La división en etapas previstas en los famosos tres “tiempos” suponía que en el primero se resolverían los problemas inmediatos de la macroeconomía para pasar en 1967 a aplicar el nuevo plan de desarrollo.

Gran parte de los integrantes del CONADE se mantuvieron en sus puestos y, aunque algunos se fueron por cuestiones políticas, otros funcionarios pasaron a cumplir funciones en el Ministerio de Economía y Trabajo. Tras la breve gestión de Salimei, ese ministerio, bajo la conducción de Adalberto Krieger Vasena se abocaría a la puesta en marcha de un plan corto plazo. La estabilización pasaba a ser requisito básico de la “normalización” económica (con lo que lograda la reducción significativa de los índices de inflación se esperaba una agresiva política de crecimiento). En este período el CONADE participó activamente en las negociaciones ante los organismos internacionales de crédito mediante la presentación de propuestas. Estas negociaciones fueron fundamentales para la asistencia financiera que recibiría la Argentina y que mejoró las reservas y alivió el peso de los servicios de deuda en la cuenta capital.

El CONADE participó activamente en el diseño de la obra pública empezando por las grandes represas hidroeléctricas, como El Chocón - Cerros Colorados (García Heras 2010, pp. 741-758), y las obras ferroviarias de envergadura como Zárate - Brazo Largo. Fue de gran importancia el Plan Vial Trienal (1968-1970) realizado conjuntamente por el CONADE y la Dirección Nacional de Vialidad.

El Cordobazo de mayo de 1969 eyectó a Krieger Vasena del Gobierno; con él se iría una figura que gozaba de apoyo empresarial e internacional. Esta salida incrementó el sesgo planificador del régimen, lo que se ve ratificado con la designación de José María Dagnino Pastore como Ministro de Economía, que era Secretario del CONADE, ocupando entonces este último cargo Eduardo Zalduendo. La política económica, y en consecuencia el sistema de planificación, pasaba a priorizar el nivel de salarios y de

empleo, con el menor nivel posible de tasa de inflación para evitar el incremento de las tensiones sociales y de los conflictos distributivos.

El Plan Nacional de Desarrollo 1970-1974, cuya redacción había comenzado con la dirección de Dagnino Pastore, fue confeccionado por destacados economistas pertenecientes al organismo y que provenían del campo académico del estructural-desarrollismo, entre los que encontramos social-católicos, como el ya citado Zalduendo y Javier Villanueva, y ditellianos, como Adolfo Canitrot y Héctor Diéguez. Coherente con esa pertenencia, partía de un diagnóstico de una realidad económica y social dominada por el dualismo, que se había incrementado en el último quinquenio como consecuencia del avance de empresas que se radicaban en nuevas ramas de la economía y que, además, habían implantado una segmentación salarial entre sus empleados y los de los restantes sectores de la economía. La brecha se reproducía encadenada en el sector agrario y en el interior. Esta estrategia de desarrollo desbalanceado generó los problemas laborales que se hicieron sentir en 1969 y que parecen ser centrales en el diagnóstico que elabora el CONADE sobre el país. Esa tendencia debía ser quebrada a través de un programa económico que, mediante la iteración global-sectorial, lograra un crecimiento del PBI del 5,5% anual acumulado.

Los principales obstáculos para alcanzar ese resultado estaban representados por las limitaciones propias del Estado argentino para actuar en el largo plazo por las limitaciones estadísticas, pero también por la ausencia de organismos regionales que pudieran aplicar el plan en las provincias y de organismos sectoriales que pudieran hacer proyecciones más afinadas de cada rama productiva. Esas restricciones de naturaleza política se agregaban a los desequilibrios externos y a la insuficiencia de la inversión para impulsar el crecimiento.

Esa tasa de crecimiento del PBI del 5,5% era el valor máximo compatible con el mantenimiento del equilibrio externo y de la deuda y significaba un incremento equivalente de importaciones pero una tasa de exportaciones de 6,7% con una importante elevación de la participación de las manufacturas de origen industrial. Si el crecimiento del PBI fuera menor, se incrementaría la desocupación de la mano de obra, una situación inaceptable en ese contexto socio-político. La meta en términos de ocupación consistía en reducir el desempleo del 5,6% hasta a un 3,3%, un nivel considerado friccional.

La política industrial era la clave del éxito del programa. Aunque se pensaba priorizar a la empresa nacional, el apoyo debía ser utilizado en forma cuidadosa por el Estado para seleccionar aquellos sectores que lo podían utilizar eficientemente. La estrategia combinaba el refuerzo de la inversión con el incremento del consumo a través de los salarios, junto con el control de precios. El sector industrial tenía una previsión de crecimiento del 7% anual, pero concentrado en las industrias básicas, de bienes de capital y exportadoras. Como estas ramas técnicamente más modernas no eran intensivas en mano de obra, debía impulsarse también el crecimiento de las ramas vegetativas para garantizar el nivel de empleo.

En ese sentido, el apoyo financiero a las empresas nacionales favorecería su equipamiento sin retrasar los ajustes salariales. Se pensaba en una reducción arancelaria que mejorara la competitividad externa, pero para preservar el empleo esa reducción debía hacerse en forma gradual, tal cual estaba previsto en el Plan de 1967. Además, se contemplaba la creación de un ente estatal destinado exclusivamente a la industria (CONADE 1970).

El PND 1970-1974 fue dejado de lado tras la salida de Onganía del gobierno y la asunción de un nuevo gobierno encabezado por el presidente Levingston que pretendía incrementar el perfil nacionalista y parcialmente distribucionista del régimen y cuyo Ministro de Obras Públicas primero y de Economía después, Aldo Ferrer, sería el principal gestor de una agresiva política de desarrollo basado en las empresas de capital nacional. El CONADE, cuya importancia en el sistema de poder había crecido de manera manifiesta, fue puesto bajo la dirección del general Juan E. Guglielmelli, ligado al desarrollismo, quien pretendió orientar la política económica y social hacia la formación de una alianza con los sindicatos. Su protagonismo provocó un conflicto con el Ministerio de Economía, que derivó en su renuncia, siendo reemplazado por Javier Villanueva.

En esos meses, sobre la base del sector estadístico del CONADE, se puso en marcha el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que había sido creado por una ley del régimen en 1968 pero que recién se pondría en marcha en 1971, encabezado por Sourrouille. El INDEC sería una organización estadística modelo de gran prestigio y solvencia técnica.

Con este mayor aporte de datos cuantitativos, se proyectaría un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, esta vez correspondiente al período 1971-1975. Este programa reflejaba un nuevo clímax político que buscaba el sector militar del gobierno; por ello estableció como meta de crecimiento del producto el 8% anual, un índice claramente exagerado que tenía más relación con las necesidades de mejorar el consenso social en relación al gobierno, y reflejaba las exigencias de la “profundización” de la Revolución, que con las posibilidades de la economía.

El diagnóstico mantenía el sesgo estructuralista del programa anterior aunque le agregaba un componente dependentista. A tono con los nuevos tiempos políticos, anunciaba como objetivo el incremento de la participación de la sociedad en las decisiones políticas, sociales y económicas, lo que preanunciaba la apertura política, con la que el CONADE pretendía empalmar. Esto también se veía reflejado en el proceso de elaboración del mismo plan que, de acuerdo al texto, fue preparado colectivamente por un conjunto de 584 personas que eran funcionarios, técnicos, empresarios y trabajadores que se reunieron en el Ministerio de Economía para tal fin. En el interior –según anunciaba– habían sido convocadas 252 entidades que habían sido participantes de la confección del programa. Este caso se condice con aquella modalidad de utilización social de la planificación que habíamos señalado en la introducción y que buscaba lograr un compromiso de la sociedad en un desarrollo nacional, autónomo y distributivo.

Más allá de que los objetivos enunciados se ponían al día con las nuevas condiciones políticas, el resto del plan seguía los parámetros de los trabajos anteriores del CONADE, reflejando los estudios realizados y el perfil técnico del organismo. Se destacaban, singularmente en este caso, las restricciones que el sector externo provocaba sobre la economía nacional al dificultar el crecimiento de las inversiones. El punto crítico se presentaba en la mayor elasticidad / ingreso de las importaciones respecto de las exportaciones, tendiendo a cronificar el déficit de cuenta corriente. El desequilibrio externo se agravaba por las tendencias negativas que presentaba la cuenta capital como consecuencia de las remesas de regalías y utilidades, junto al pago de los servicios de deuda.

Para resolver estos problemas el plan proponía una serie de medidas tendientes a corregir los desajustes, buscando el apoyo a las empresas de capital nacional. Entre esas medidas estaban la transformación del Banco Industrial en Banco Nacional de Desarrollo, la creación de un ente estatal destinado a sostener la manufactura nacional, la adopción de programas de reconversión industrial para las ramas más antiguas, la extensión de los programas de modernización agropecuaria, la consolidación del Plan de Inversión Pública en Infraestructura, la incorporación de programas tendientes a reducir las diferencias salariales entre regiones y sectores y de programas de innovación tecnológica y científica. Por último, propiciaba una decidida política de implantación de Polos Nacionales de Desarrollo, que comenzarían a insertarse en algunas ciudades importantes del interior del país.

El nuevo cambio de mando en el régimen, con la asunción del General Alejandro Lanusse en la presidencia, haría abandonar nuevamente el plan redactado y con ello la aspiración a la planificación global, aunque continuaba el plan de obras públicas, así como algunos proyectos con participación privada, como el de Aluar en Puerto Madryn, que dejaría no pocas dudas sobre su tramitación. De todas formas, reflejaba cierta aspiración de continuidad de proyectos globales en un contexto cada más vez difícil para el régimen autoritario. La menor importancia de la política económica quedaría evidenciada en la transformación del Ministerio de Economía en Ministerio de Hacienda. El CONADE también perdería su incidencia en el gobierno, a pesar de haber sido elevado jerárquicamente a la condición de Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno en octubre de 1971, con la inclusión en su interior de los antiguos Consejo Nacional de Seguridad y de Ciencia y Técnica. Aunque con variaciones de contenido, este esquema se mantuvo en la experiencia peronista iniciada en 1973.

A MODO DE CONCLUSIÓN

En tanto institución-modelo de la acción estatal, el CONADE estuvo sometido a los vaivenes de la precaria situación institucional argentina de la década de 1960. Como balance general, se advierte que el CONADE supo influir en la capacidad técnica del Estado, aunque formalmente los planes nacionales de desarrollo no pudieron aplicarse.

En cambio, existieron planes sectoriales y de inversión en obras públicas e infraestructura que tuvieron un mayor nivel de aplicación. Por otra parte, debemos agregar sus aportes a los estudios globales y sectoriales y al desarrollo de la estadística pública, que concluiría en 1967 con la creación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De ahí que tuviera una incidencia no despreciable en la fijación de la agenda para la administración pública y los medios políticos, al plantear nuevos temas y formas distintas de enfocar los desafíos del desarrollo.

La cuantificación de la economía fue otro de los aportes de la planificación a las prácticas gubernamentales y profesionales. La generación de los distintos modelos analíticos que constituían el diagnóstico de cada plan estimuló el conocimiento sectorial, nutrido con una ingente información cuantitativa. La planificación también resultaría una tentativa, en alguna medida lograda, de movilización de la burocracia estatal y de organizaciones sociales en pos de los objetivos del Estado. Para los integrantes del sistema de planeamiento, sus funciones adoptaron una trascendencia inusual por el sentido transformador que la tarea tuvo en torno a las posibilidades de corregir el rumbo nacional. El sistema de planificación contribuyó a plasmar consensos en torno a la necesidad de aplicar políticas de ingresos que contemplaran las necesidades del sector asalariado, cuya importancia dentro del consumo se convirtió en un elemento decisivo del nivel de actividad. Otro consenso que empezó a advertirse fue la necesidad de incrementar las exportaciones industriales, pero también de hacer más eficiente la producción nacional y los servicios públicos.

Existe una sensación generalizada de que la planificación y los planes contenían una exagerada dosis de optimismo respecto a las posibilidades de alcanzar las metas propuestas. Una interpretación respecto de este optimismo consiste en suponer que la fijación de objetivos ambiciosos no era contraria al sentido de la planificación en la medida en que dichos objetivos se convertían en estímulos para exigir al máximo las capacidades existentes; de todas maneras, desde esta misma lectura se hacía imprescindible hacer una clara distinción entre objetivos que, de no alcanzarse, no modificarían la viabilidad del plan y aquellos otros que, en caso de fracaso, podrían hacer sucumbir el plan entero, de modo que, cuando el optimismo no se basaba en medios disponibles, se convertía en un obstáculo para el éxito general del plan (Gordillo 1968, p. 5). Este clima optimista podría constituir un acicate para su difusión, pero también sería en el futuro un obstáculo para una aplicación fructífera.

Nosotros proponemos una lectura alternativa aunque complementaria, que consiste en considerar la planificación como un modo de movilización de los recursos burocráticos a fin de colocarlos al servicio del proyecto gubernamental (un sesgo que lo acercaba al modelo de planificación centralizada y compulsiva). Así, los “errores” de cálculo que se deslizaban eran deliberados. De esta forma, se buscaba movilizar a la burocracia y eventualmente reglamentar las organizaciones de la sociedad civil con metas trascendentes y “patrióticas”, para intentar encolumnarlas detrás de los distintos lineamientos del gobierno en las más diversas áreas de la vida colectiva. No obstante, el

caso más claro de la planificación como modo de movilización de la burocracia y de la sociedad civil fue previa: el Segundo Plan Quinquenal (1952-1957).

En cuanto a los déficits, debemos señalar que las capacidades estatales resultaron inferiores a las postuladas por la teoría de la planificación, pues esta insuficiencia estaba incluida en el propio plan que se proponía incrementarlas. La respuesta de los empresarios tampoco estuvo a nivel de los requerimientos. En términos generales, en relación a las metas planificadas, las altas tasas de inflación resultaron elementos claramente distorsivos, aun cuando las proyecciones se hicieran a pesos constantes, por su efecto negativo sobre la tasa de inversión y sobre los ingresos públicos. Por otra parte, la inestabilidad macroeconómica obligaba a los gobiernos a priorizar siempre el corto plazo, renunciando a políticas más estructurales. Las brechas entre expectativas y posibilidades, entre demandas sociales y capacidad de satisfacerlas fueron crecientes y se correspondieron con cierto desfase entre administradores y planificadores. Mientras los últimos se preocupaban más por atender y estudiar los problemas sin tomar en consideración las necesidades de corto plazo del político y del ministro de Economía, los *policy makers* se encontraron inmersos en coyunturas en las que debían tomar medidas para resolver problemas puntuales y atender a grupos de presión y a factores de poder. De esta forma, se fue perdiendo la necesaria unidad entre los tiempos, vale decir, lo que daba sentido al plan (Cibotti y Bardeci 1974).

BIBLIOGRAFÍA

- BALBOA, Manuel, 1958. La utilización del modelo insumo-producto en las proyecciones de la economía argentina. *Desarrollo Económico*, año I vol. 1, Buenos Aires.
- BÉRTOLA, Luis y Juan Antonio OCAMPO, 2010. *Desarrollo, vaivenes y desigualdad. Una historia económica de América Latina desde la Independencia*. Madrid: Secretaría General Iberoamérica.
- CEPAL, 1963. *Progresos en materia de planificación en América Latina. Nota de la Secretaría General y del Instituto de Planificación Económica y Social*. Mar del Plata.
- CIBOTTI, Ricardo y Oscar BARDECI, 1974. *Un enfoque crítico de la planificación en América Latina*. USAL, Documento N° 56. Buenos Aires, julio-diciembre.
- CONADE, 1970. *Exposición sobre el Plan Nacional de Desarrollo 1970-1974*. Buenos Aires.
- DANIEL, Claudia, 2013. Estadísticas sociales para el proyecto desarrollista. Notas para su estudio. En *X Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires*. Julio de 2013.
- FRANCO, Juan Pablo, 1969. Reflexiones en torno al desarrollismo: el caso frigerista. En AA.VV., *Desarrollo y desarrollismo*. Buenos Aires: Galerna, pp. 341-405.
- FRONDIZI, Arturo, 1958. *Programa de estabilización para la economía argentina*. Buenos Aires.
- GARCÍA HERAS, Raúl, 2010. Finanzas internacionales y desarrollo energético. El caso del complejo hidroeléctrico El Chocón - Cerros Colorados en la Argentina. 1955-1974. En José MORILLA CRITZ (editor), *Homenaje a Gabriel Tortella: las claves del desarrollo económico y social*. Madrid: Lid Editorial Empresaria, pp. 741-758.
- GERCHUNOFF, Pablo y Lucas LLACH, 1998. *El ciclo de la ilusión y el desencanto*. Buenos Aires: Ariel.
- GOLDBERG, Samuel, 2004. *Propuesta Metodológica de Planificación. Informe Final*. Programa Multisectorial de Preinversión II, Buenos Aires.
- GORDILLO, Agustín, 1968. *La planificación del desarrollo. Aspectos jurídicos, políticos y administrativos*. Buenos Aires: OEA, Programa de Cooperación Técnica, Proyecto 102.

- HERSCHEL, Federico (coord.), 1965a. *Política fiscal en la Argentina*. Buenos Aires: Consejo Federal de Inversiones.
- 1965b. *La estrategia de planificación tributaria*. Buenos Aires: CONADE.
- 1978. *Introducción a la predicción económica*. México: FCE.
- LUNA, Félix, 1998. *Diálogos con Frondizi*. Buenos Aires: Planeta.
- MALLON, Richard y Juan V. SOURROUILLE, 1973. *La política económica en una sociedad conflictiva*. Buenos Aires: Amorrortu.
- MANNHEIM, Karl, 1942. *Libertad y planificación social*. México: Fondo de Cultura Económica.
- MAYNARD, G., 1962. *Economic Development and Price Level*. London: MacMillan.
- 1989. Argentina: Macroeconomic Policy 1966-1973. En Guido Di Tella & Rudiger Dornbusch, *The Political Economy of Argentina, 1946-1983*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- NEIBURG, Federico y Mariano PLOTKIN, 2004. Los economistas. El Instituto Torcuato Di Tella y las nuevas elites estatales en los años sesenta. En Federico Neiburg y Mariano Plotkin (comps.) *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en la Argentina*. Buenos Aires: Paidós.
- PERROUX, François, 1967. *Técnicas cuantitativas de planificación*. Barcelona: Ariel.
- PORTANTIERO, Juan Carlos, 1977. Economía y política en la crisis argentina. *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 39 n° 2.
- RIJCKEGHEM, W. VAN, 1965. *A Model of Inflation in the Argentine Economy*. Buenos Aires: CONADE.
- SELDON, Arthur y F. G. PENNANCE, 1967. *Diccionario de Economía*. Barcelona: Oikos-Tau.
- SIKKINK, Kathryn, 1988. The Influence of Raul Prebisch on Economic Policy-Making in Argentina, 1950-1962. *Latin American Research Review*, vol. 23 n° 2.
- THORP, Rosemary, 1998. *Progreso, Pobreza y Exclusión. Una historia Económica de América Latina en el Siglo xx*. Nueva York: BID / Unión Europea.